



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-019-2021-00315-01
Demandante:	Pedro Ángel Córdoba Urrutia
Demandado:	Construcciones Palacio Elorza S.A.S., Consorcio Redes GM, Empresa de Desarrollo Urbano, Empresas Públicas de Medellín, Colpensiones
Llamado en Garantía:	Seguros del Estado S.A. y Mario de Jesús Gil
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Sanción moratoria, indemnización por despido injusto

**Medellín, agosto once (11) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora y el apoderado del consorcio Redes GM, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de mayo de

2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor PEDRO ANGEL CORDOBA URRUTIA en contra de CONSTRUCCIONES PALACIO ELORZA S.A.S, CONSORCIO REDES GM integrado por la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GOMEZ, contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO y COLPENSIONES, proceso al cual se llamó en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A. y al señor MARIO DE JESUS GIL CARDONA. Radicado 05001-31-05-019-2021-00315-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

El señor PEDRO ANGEL CORDOBA URRUTIA llamó a juicio a la sociedad CONSTRUCCIONES PALACIO ELORZA S.A.S, al CONSORCIO REDES GM integrado por la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GOMEZ, a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO y COLPENSIONES, pretendiendo se declare que tuvo un contrato de trabajo por obra o labor con la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S, que se extendió desde el 11 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2019; se declare que en virtud del artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo las sociedades Construcciones Palacio Elorza S.A.S, el Consorcio Redes GM, la Empresa para el Desarrollo Urbano y Empresas Públicas de Medellín son solidariamente responsables del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que se tenga derecho y se declare que el contrato de trabajo fue terminado de manera ilegal y sin justa causa.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene a las demandadas al pago de las cesantías, intereses a las cesantías, la sanción por el no pago de los

intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones, al pago de la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización por despido injusto, intereses legales o indexación y al pago de los aportes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte con los respectivos intereses.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, en síntesis, que entre Empresas Públicas de Medellín y la Empresa para el Desarrollo Urbano se celebró un contrato interadministrativo CT 2017-000677 consistente en la generación del programa Unidos por el agua, mejoramiento integral de barrios, en los círculos los Mangos, Santo Domingo, Corazón y Corazón alto del municipio de Medellín. Se adujo que el Consorcio Redes GM conformado por la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor Mauro Vélez Gómez, suscribió con la Empresa para el Desarrollo Urbano el contrato N° 3302-82, cuyo objeto era la construcción, ampliación y referenciación de redes de acueducto, alcantarillado, acometidas de acueducto, domiciliarias de alcantarillado, obras accesorias y obras complementarias para los circuitos del contrato interadministrativo CT-2017-000677. Asimismo, se explicó que el Consorcio Redes GM subcontrató la ejecución del contrato N°3302-82 con la sociedad Construcciones Palacio Elorza SAS.

Se narró que el actor fue vinculado en virtud de un contrato de trabajo por duración de la obra o labor determinada, para desempeñarse en el cargo de ayudante de construcción por parte de la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.AS, iniciando la prestación del servicio el 11 de octubre de 2019, ejecutando las labores en el barrio Belencito Corazón, teniendo como salario el correspondiente al mínimo legal, informando que el 30 de octubre de 2019, el señor Hugo Palacio representante legal de Construcciones Palacio Elorza SAS, le indicó al demandante que ya no había más trabajo para él y que se debía ir para su casa, resaltando que a la fecha no han sido canceladas las acreencias laborales, ni la indemnización por despido injusto.

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

Efectuadas las diligencias de notificación, los accionados procedieron a dar respuesta al líbelo genitor en los siguientes términos:

La sociedad **G7G S.A.S.** y el señor **MAURO VÈLEZ GÓMEZ**, integrantes del consorcio **REDES GM**, aceptaron como cierto que entre Empresas Públicas de Medellín EPS y la Empresa para el Desarrollo Urbano, se suscribió el contrato interadministrativo CT-2017-000677, cuyo objeto fue el referenciado en la demanda, asimismo, que el Consorcio Redes GM suscribió el contrato N°3302-82 con la Empresa de Desarrollo Urbano, presentándose una subcontratación de una fracción del contrato, que es cierto que el demandante fue contratado mediante contrato de trabajo por duración de la obra o labor la sociedad Construcciones Palacio Elorza SAS, aclarando que la fecha de inicio de dicho contrato, lo fue el 18 de julio de 2019 y que se pactó una remuneración del salario mínimo legal.

Refirió que el subcontrato entre el Consorcio Redes GM y Construcciones Palacio Elorza, se terminó por mutuo acuerdo el 9 de noviembre de 2019, que no es cierta la fecha de terminación de la relación laboral, por cuanto el demandante laboró hasta el 8 de noviembre de 2019 y que al actor se le canceló la suma de \$504.744 por concepto de liquidación laboral, por lo que no es cierto que se le adeuden acreencias laborales y en oposición a la prosperidad de las pretensiones formuló la excepción de inexistencia de la obligación.

Por su parte **EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP**, aceptó como cierto la celebración del contrato interadministrativo N° CT2017-00067 con la Empresa de Desarrollo Urbano, el contrato suscrito por el Consorcio Redes GM con la Empresa de Desarrollo Urbano y el objeto del mismo, y que a su vez el Consorcio Redes GM subcontrató con la Constructora Palacio

Elorza SAS, señalando que los demás hechos no le consta de manera directa por tratarse de información de terceros y por ende no debe EPM pronunciarse de manera directa.

Como medios exceptivos propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva con respecto a EPM ESP; inexistencia sustancial del derecho; prescripción; pago; buena fe: inexistencia de la obligación; falta de causa y carencia de acción; no prosperidad de la sanción moratoria.

Finalmente, llamó en garantía a la Sociedad Seguros del Estado S.A, pretendiendo que en el hipotético caso que la sentencia sea condenatoria, la llamada en garantía pague el total del monto de la condena que tuviere que reconocérsele al demandante, o que le reembolse el monto total pagado de acuerdo con la garantía otorgada.

A su vez, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO**, admitió como cierto la celebración del contrato interadministrativo N° CT2017-00067 con Empresas Públicas de Medellín ESP y el contrato suscrito por el Consorcio Redes GM con la Empresa de Desarrollo Urbano, sosteniendo que no le constan los demás supuestos fácticos por tratarse de situaciones que no vinculan directamente a la entidad, la cual no presentó vínculo contractual directo con la empresa Construcciones Palacio Elorza, ni con el demandante.

Se opone a las pretensiones y para ello enunció las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva en relación a la EDU; inexistencia de solidaridad; eficacia de la terminación del contrato; prescripción; pago; buena fe; inexistencia de la obligación.

Por último, procedió a llamar en garantía a la aseguradora Seguros del Estado S.A, y al señor Mario de Jesús Gil Cardona (interventor), a fin de que, de proferirse condena en contra de los intereses de la EDU, se les imponga la

obligación de cubrir los pagos de dichas condenas, con ocasión del contrato de seguros que obra en la póliza 65-44-101169868 y el contrato 3302-92.

**COLPENSIONES**, por intermedio de apoderado judicial al pronunciarse sobre la demanda, señaló no constarle ninguno de los hechos por ser ajenos a la entidad. Manifiesta no oponerse a las pretensiones, sin embargo, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; prescripción; excepción innominada; compensación e imposibilidad de condena en costas.

La **CONSTRUCTORA PALACIO ELORZA SAS**, no dio respuesta a la demanda.

La sociedad llamada en garantía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y el señor **MARIO DE JESUS GIL CARDONA**, presentaron oposición a las pretensiones del llamamiento en garantía.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 23 de mayo de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que entre el señor Pedro Ángel Córdoba Urrutia como trabajador y la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S., como empleadora, existió un contrato de trabajo a término indefinido, que se prolongó entre el 16 de julio y el 30 de octubre de 2019, cuando fue terminado en forma unilateral y sin justa causa por el empleador; condenó a la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S, a reconocer y pagar al demandante la suma de \$828.116 por concepto de indemnización por despido sin justa causa, con su respectiva indexación; igualmente, a cancelar a nombre del accionante los aportes o cotizaciones correspondientes a los ciclos que van desde el 16 de julio y hasta el 30 de

octubre de 2019, para lo cual se tendrá como IBC el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para la época, con destino a Colpensiones, debiendo asumir el pago de los intereses que dentro del cálculo se establezcan por la entidad de seguridad social; condenó a la sociedad 7G7 S.A.S. y a MAURO VELEZ GOMEZ, quienes conforman el Consorcio Redes GM, a responder en forma solidaria por las obligaciones impuestas en favor del demandante, al considerarse que resultan ser beneficiarios del trabajo o dueños de la obra en los términos del artículo 34 del CST; absolvió a las demandadas de las demás pretensiones, exonerando de responsabilidad a los llamados en garantía y condenó en costas a Construcciones Palacio Elorza SAS., 7G7 SAS y a MAURO VELEZ GOMEZ

#### **1.4. RECURSOS**

##### **Demandante**

Interpone recurso exclusivamente en lo que tiene que ver con la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, señalando que dicha sanción no aplica de manera automática, sino que debe analizarse la buena o mala fe con la que actuó el empleador para la no cancelación de salarios y prestaciones sociales al momento de la terminación del vínculo laboral, ella procede cuando quiera que en el marco del proceso el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta, para esto se debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso y de las circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables, de igual modo la jurisprudencia laboral ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o la simple afirmación del demandado de creer que está actuando conforme a derecho, pues en todo caso es indispensable la verificación de otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que

asumió en su condición de deudor obligado, vale decir, debe contemplarse el haz probatorio para explorar la existencia de otros argumentos valederos que sirva para abstenerse de imponer la sanción.

Resalta que para el caso de autos, las demandadas se sustrajeron de la carga probatoria para demostrar que la mora y el pago parcial se dio por razones que justificaran dicha acción, solo admiten el pago, sin razón de esa tardanza y del monto reconocido, aunado a lo anterior, siendo consecuentes con la providencia emitida, si se dispone el reconocimiento y pago de una indemnización por despido, el mismo artículo 65 del CST en su párrafo primero también indica que el empleador cuando da por terminado el contrato de trabajo con fundamento en el artículo 64 del mismo estatuto debe demostrar el pago de los aportes a la seguridad social y conforme lo indicó el juez se dispuso que como no existe la prueba del pago de esos aportes, el empleador incurrió en mora al abstenerse del pago a la seguridad social, luego entonces, si bien la jurisprudencia ha dicho que el hecho de omitirse el pago de esos aportes no puede entenderse como que el despido será ineficaz, si conlleva es al pago de la sanción del artículo 65 del CST hasta que se ponga al día con el pago de los aportes a seguridad social, por lo que es procedente el pago de esta indemnización, solicitando se revoque la sentencia en este aspecto.

**Sociedad 7G7 SAS y Mauro Vélez Gómez**

Manifiesta su inconformidad respecto a la declaración de despido sin justa causa, aduciendo que el contrato firmado entre el demandante y Construcciones Palacio Elorza es un acuerdo de voluntades, en el cual fijaron la modalidad de contrato y esta es obra o labor determinada, advirtiéndole que si bien es cierto como dice el juez no se especifica exactamente cuál es la labor, ello obedece a que en asuntos de la construcción un mismo trabajador hace



múltiples funciones, puede excavar, transportar material en carretilla, encofrar, vaciar concreto, si la labor no está determinada lo que sí está determinado es la obra y el subcontrato que se tenía entre Palacio Elorza y el Consorcio duró hasta el 9 de noviembre de 2019, día en que se terminó la obra por parte del subcontratista, pues no se terminó la misma por parte del consorcio, ni de la EDU, ni de EPM.

Indicó que sostener que si no se fijó la labor, el contrato es a término indefinido, sería aplicable para el trabajador que estuviere contratado directamente por el Consorcio, pero no para quien estuviere contratado a través de un subcontratista, reiterando que la labor y obra termina cuando se termina el contrato del subcontratista, obrando en el expediente carta de finalización de noviembre 20 de 2019, sobre la que no se hizo ningún pronunciamiento y si bien se acogió la jurisprudencia, este es un caso excepcional, que no se puede generalizar y es que se está hablando de una solidaridad y de un contrato celebrado legalmente entre subcontratista y trabajador, donde voluntariamente se fijó la modalidad contractual, lo que debe predominar no es la labor que se fijó o que se pretendió fijar, sino la obra y en ese orden de ideas, reitera que la terminación del contrato entre la Constructora Palacio Elorza y el señor Pedro Ángel se justificó porque la obra terminó, en este momento se concurre como solidarios 7G7 y Mauro Vélez y no como contratantes de una relación laboral, lo que es cierto y quedó determinado y probado es que el contrato entre contratista y contratante se terminó el 9 de noviembre de 2019.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de la parte actora, Colpensiones y los llamados en garantía. El procurador judicial de la activa reitera lo manifestado en la sustentación del

recurso de alzada, a fin de que se revoque la sentencia parcialmente y se ordene el reconocimiento de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, toda vez que, si bien se estableció en el proceso un pago de salarios y prestaciones sociales, el mismo no se realizó en el término de ley y se cumplió por un tercero que no era el empleador directo, pago que obedeció al paz y salvo que exigía la Empresa de Desarrollo Urbano para la cancelación del contrato N° 3302-82, pues de no haber existido esa reclamación por parte de la EDU, ni siquiera se habría cancelado los salarios y prestaciones sociales al actor, lo que denota un actuar de mala fe del empleador, además de insistir en que no se cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

El apoderado de Colpensiones señala que la entidad no tiene injerencia en este caso, como quiera que el debate debe hacerse exclusivamente entre el demandante y los empleadores, por lo que debe exonerarse a Colpensiones de cualquier responsabilidad derivada del proceso.

Por su parte, el apoderado de Seguros del Estado S.A., solicita se confirme la sentencia de primera instancia en lo que refiere a la no configuración de la solidaridad en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo frente a las codemandadas Empresa de Desarrollo Urbano y Empresa Públicas de Medellín EPS, dejando constancia que las partes que apelaron la sentencia no cuestionaron de manera alguna la desvinculación de Empresas Públicas de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano, así como tampoco la inexistencia de la obligación a cargo de las compañías aseguradoras, por lo que deberían ser confirmados los numerales quinto y sexto de la sentencia.

Finalmente, el apoderado del señor Mario de Jesús Gil Cardona, llamado en garantía sostiene que no es dable predicar la solidaridad en el presente caso, que fue precisamente el razonamiento que tuvo el Juez de primera instancia, por lo que solicita se confirme de manera íntegra la sentencia.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

### **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- La celebración del contrato interadministrativo N° CT2017-000677 entre Empresas Públicas de Medellín ESP y la Empresa de Desarrollo Urbano, cuyo objeto cuyo objeto correspondió a “*MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA DEL PROGRAMA: UNIDOS POR EL AGUA, MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, EN LOS CIRCUITOS LOS MANGOS, SANTO DOMINGO Y CORAZÓN + CORAZÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN*”, el cual reposa a folios 93 a 106 del anexo 19
- La existencia de la relación laboral entre el señor Pedro Ángel Córdoba Urrutia y la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S., entre el 18 de julio de 2019 y el 30 de octubre de 2019.

- La suscripción por parte del actor de un certificado de paz y salvo por todo concepto laboral el 21 de diciembre de 2019, véase folio 12 del anexo 18 del expediente digital.

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si la relación laboral existente entre el señor Pedro Ángel Córdoba Urrutia y la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S., finalizó unilateralmente por parte del empleador sin que mediara justa causa para ello y, en consecuencia, si resulta acertada la decisión del a quo, debiéndose en caso afirmativo determinar si el contrato laboral que unió a las partes, lo fue por duración de la obra o labor o si en la realidad se trató de un contrato a término indefinido?

¿Si es procedente revocar la sentencia de primera instancia en cuanto absolvió a la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S., de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para en su lugar ordenar su pago?

### **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) en atención a la falta de especificación de la obra o labor para la cual se contrató la prestación personal del servicio del demandante, la relación que unió a las partes estuvo regida por un contrato de trabajo a término indefinido, el cual finalizó sin justa causa por parte del empleador, ii) no se acredita una causa razonable, que justifique la tardanza en el pago de las prestaciones sociales del demandante; en consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA

PARCIALMENTE en el numeral quinto, para en su lugar condenar al empleador Construcciones Palacio Elorza S.A.S., al reconocimiento y pago de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, entre la fecha del despido y el pago de las prestaciones, obligación de la cual es solidariamente responsable el Consorcio Redes GM, CONFIRMANDOLA en lo demás, tal y como se explica:

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

La Constitución Política de 1991 erige al trabajo como un valor fundante del Estado, es así como en el artículo 25, lo define como un derecho y una obligación social que goza en todas sus formas de la especial protección estatal.

A su vez el trabajo subordinado debe ser garantizado en condiciones dignas y justas, con fundamento en los principios generales de igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultad de transigir sobre derechos inciertos, principio de favorabilidad al trabajador en caso de duda sobre la aplicación o interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades, garantía a la seguridad social, capacitación y descanso necesario. (artículo 53 Carta Constitucional).

En este contexto el Código sustantivo de Trabajo en el artículo 57 establece como obligación del empleador pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos y asimismo el legislador consagró en el referido estatuto otros derechos y prestaciones de carácter social a favor del trabajador dependiente y a cargo del patrono, entre los que se cuentan las vacaciones remuneradas, artículo 189, el auxilio de cesantía, artículo 249 y las

primas de servicios, artículo 206. En adición a ellos el artículo 1 Ley 52 de 1975 establece el reconocimiento de los intereses a las cesantías.

Este conjunto de derechos salariales, prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social integral, son considerados como derechos ciertos e indiscutibles y por ende son irrenunciables para el trabajador.

Es en virtud de la aplicación de los citados principios constitucionales y legales que se caracteriza el derecho laboral como derecho tuitivo y protector de los derechos de los trabajadores, sin que ello signifique que al ejercer la acción judicial se releve al colaborador de las cargas probatorias.

Es así como los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, consagran las reglas probatorias de necesidad y carga de la prueba, así:

*“Artículo 164. Necesidad de la prueba. “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”*

*“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.*

*No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de*

*incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.*

*Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.*

*Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”*

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso sometido al estudio de la Sala, teniendo en cuenta los puntos de disenso presentados por los apoderados recurrente, no existe discusión en torno a la existencia de la relación laboral entre el señor Pedro Ángel Córdoba Urrutia y la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S., cuyos extremos temporales lo fueron del 18 de julio de 2019 al 30 de octubre de 2019, que el actor recibía como remuneración el salario mínimo legal mensual vigente y que el Consorcio Redes GM integrado por la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor Mauro Vélez Gómez, es solidariamente responsable de las obligaciones impuestas al empleador.

Partiendo de lo anterior y en relación al primer problema jurídico planteado, consistente en determinar si la relación laboral finalizó sin justa causa imputarle al empleador, encuentra este Juez Plural acertada la decisión del a quo, ello por cuanto se advierte que ante la inasistencia del representante legal de Construcciones Palacio Elorza S.A.S, a la audiencia de conciliación, el juez de instancia lo declaró confeso respecto de los hechos quinto, sexto, octavo, noveno y décimo primero, teniendo como en el hecho décimo primero se plasmó “El día 30 de octubre de 2019, el señor HUGO PALACIO, representante legal de CONSTRUCCIONES PLACIO ELORZA SAS le indicó a mi mandante que ya

*no había más trabajo para él, y por lo tanto se debía de ir para su casa*”, supuesto fáctico a partir del cual se establece el finiquito de la relación laboral sin justa causa.

Ahora, si bien la confesión declarada por el fallador primario admite prueba en contrario y en tal sentido puede ser desvirtuada, no existe ningún elemento probatorio que dé cuenta, en primer lugar, de la fecha en que efectivamente finalizó el vínculo contractual, ni las razones que motivaron dicha terminación, razón por la cual, quedó incólume la confesión ficta respecto del citado numeral décimo primero de la demanda, sin que sea posible concluir, como lo sostiene el apoderado la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GÓMEZ, que el pretensor hubiere laborado hasta el 8 de noviembre de 2019.

En adición a lo anterior, si bien a folios 13 del anexo 18, ya citado, se glosa la comunicación del 20 de noviembre de 2019, dirigida por el Consorcio Redes GM a Construcciones Palacio Elorza S.A.S, en la cual se certifica que la obra en la cual prestaba los servicios el actor, finalizó el 9 de noviembre de dicha calenda, tal prueba documental no permite establecer que tal data sea la fecha de la finalización del contrato de trabajo del demandante.

Dilucidado lo anterior y toda vez que el vocero judicial de la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GÓMEZ, sostiene que el contrato que unió a las partes lo fue de obra o labor contratada, pues fue esa la voluntad de las partes y no un contrato a término indefinido como lo estableció el Juez, pasa la Sala a determinar la naturaleza del vínculo contractual, punto que resulta de la mayor relevancia, en tanto que de ello depende la cuantía de la indemnización a reconocer al accionante.



Con tal finalidad, se tiene que a folios 43 a 48 del anexo 02 del expediente digital reposa copia del contrato individual de trabajo por obra o labor determinada suscrito por el señor Pedro Ángel Córdoba Urrutia y Construcciones Palacio Elorza S.A.S, en la cual en parte alguna se especifica cuál es la obra o la labor a desempeñar por el actor, no siendo de recibo para esta Colegiatura el argumento expuesto por el apoderado de la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GÓMEZ, en relación a que en asuntos de la construcción un mismo trabajador hace múltiples funciones y que si la labor no está determinada lo que sí está determinado es la obra, pues se reitera que en el contrato suscrito por las partes la obra no está determinada.

En ilación a lo anterior, tiene que el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio, resaltando que en este tipo de contratos las partes deben especificar con suma claridad en que consiste la obra a realizar o la labor que debe desplegar el trabajador, pues solo con el conocimiento exacto de ese punto, puede aplicarse el modo de terminación propio de esta modalidad previsto en el literal d) del artículo 61 del C.S.T.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en sentencia SL2600 del 27 de junio de 2018, Radicación n.º 69175, con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, puntualizó:

*“Nuevamente, en el caso del contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada, la ley no impone la prueba del acto jurídico a través de un medio probatorio específico, de tal suerte que su existencia puede establecerse a través de cualquier elemento de convicción. A ello vale agregar que incluso el legislador permite inferir una estipulación en tal sentido de «la naturaleza de la labor contratada», esto es, de las características de la actividad contratada.*

*En efecto, el numeral 1.º del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo prevé:*

*1o) El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté determinada por la de la obra, o **la naturaleza de la labor contratada**, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido.*

*“Hay que subrayar, desde luego, que la obra o labor contratada debe ser un aspecto claro, bien delimitado e identificado en el convenio, o que incontestablemente se desprenda de «la naturaleza de la labor contratada», pues de lo contrario el vínculo se entenderá comprendido en la modalidad residual a término indefinido. En otras palabras, ante la ausencia de claridad frente a la obra o labor contratada, el contrato laboral se entiende suscrito a tiempo indeterminado.”*

*“Para este magistrado resulta que ese contrato no reúne las condiciones para ser tenido como un convenio por la duración de la obra o labor contratada, puesto que en el objeto del contrato no se determinó con claridad la obra o labor para la que fue contratado el trabajador. Si bien este requisito, que puede ser cumplido de manera escrita dentro del mismo contrato o verbalmente, exige que se tenga plena claridad sobre la obra o labor para la cual se contrata, tratándose de fijar unos momentos o hitos iniciales y una posibilidad de determinar la finalización de esa obra o labor, tomándose en cuenta aspectos cualitativos o cuantitativos, se nota no fue cumplido en la contratación anterior, pues simplemente se dice que el objeto del contrato es el transporte de personal y material de vehículos para el consorcio Ituango, en la ejecución del contrato suscrito con el consorcio Ituango, cuya vigencia inició a partir de enero de 2017”.*

Siendo claro que el contrato analizado en esta oportunidad no cumple con las condiciones de claridad, exigidos por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para esta modalidad contractual, pues se repite no se logra determinar con precisión la obra o labor, para la cual fue

contratado el accionante, siendo consecuencia de ello, que el contrato celebrado se entienda a término indefinido, razón por la cual se impone la confirmación de la sentencia en este punto.

### ***Sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo***

El no pago de los salarios y prestaciones sociales, fue calificado por el legislador, de tiempo atrás, como una conducta merecedora de sanción. Es así como el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, dispone:

*“Artículo 65. Indemnización por falta de pago:*

*1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.*

*Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”.*

En este tema, ha sido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que ha precisado que la sanción por el retardo en el pago de salarios y prestaciones sociales del trabajador no es de aplicación automática, al respecto, en sentencia SL1451 del 25 de abril de 2018, recordó: *“La Corte en desarrollo de su función de interpretar las normas del trabajo y crear jurisprudencia, ha*

*sostenido que la sanción moratoria no es automática. Para su aplicación el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe (SL8216-2016)."*

En esta perspectiva lo que debe probarse en el proceso es la buena fe que exonere de la sanción y no la mala fe, por ende, quien tiene la carga probatoria de probar el hecho, es, sin duda, el empleador, así lo precisó también la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás, en sentencia radicación 32529 de 2009:

*"De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el dispensador de justicia concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe. Se equivoca por tanto el recurrente cuando, al inicio del cargo, afirma que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la indemnización moratoria "... requiere que quien la aduce demuestre una conducta torticera de empleador para perjudicar al trabajador", porque, como ha quedado visto, por el contrario, quien debe demostrar que su conducta estuvo revestida de buena fe es el empleador; mientras que al trabajador le basta probar la omisión o el retardo en el pago de los derechos laborales que da lugar a la sanción".*

Lo anterior resulta razonable, además, teniendo en cuenta que las circunstancias constitutivas de buena fe, como lo son aquellas causas plausibles, entendibles, justificadas para no haber procedido al pago o haber realizado un pago deficitario o tardío, competen exclusivamente al empleador. En el sublite, el a quo consideró que toda vez que se acreditó el pago de las prestaciones sociales del accionante, no había lugar a la sanción moratoria, sin embargo, disiente la Sala del análisis efectuado por el fallador, considerando que el mismo se quedó corto, en tanto que si bien se acreditó que el Consorcio Redes GM, realizó el pago de las prestaciones al actor, conforme al documento obrante a folio 11 del anexo 18 del expediente digital, documento firmado por el gestor del proceso, ese documento no da cuenta de la fecha en la cual se realizó el pago.

Se tiene igualmente, que el accionante manifestó que sufrió un derrame cerebral a partir del cual no recuerda muchas cosas, señalando en el interrogatorio no recordar si recibió el pago de las prestaciones sociales, si reconoció su firma en el documento al que se ha hecho alusión y asimismo en la paz y salvo que milita a folio 12 del anexo 18 del expediente digital, en virtud de lo cual debe entenderse realizado al pago. En lo que concierne a la fecha en que se realizó el referido pago, atendiendo a la paz y salvo suscrito por el actor el cual tiene fecha del 21 de diciembre de 2019, para la Sala, debe tomarse tal data como referente de la cancelación de las acreencias laborales, dado que no existe prueba alguna, de que el pago que recibió el accionante se hubiere presentado con anterioridad al 21 de diciembre de 2019.

Por lo anterior y toda vez que se determinó como fecha de terminación de la relación laboral el 30 de octubre de 2019, advierte la Sala una mora en el pago de las prestaciones sociales, de cincuenta y un días, sin que se probara una causa razonable, lógica, entendible que explique o justifique dicha mora, así las cosas, estima procedente esta instancia, revocar parcialmente el numeral quinto del fallo apelado, para en su lugar condenar a la sociedad Construcciones Palacio Elorza S.A.S, a reconocer y pagar al demandante la suma de \$1.407.797 por concepto de sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, liquidada sobre el salario mínimo legal devengado, obligación de la cual es solidariamente responsable la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GÓMEZ, integrantes del Consorcio Redes GM.

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GÓMEZ, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

**FALLA:**

1.- Se **REVOCA PARCIALMENTE** el numeral quinto de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 23 de mayo del 2022, en el proceso ordinario instaurado por el señor PEDRO ANGEL CORDOBA URRUTIA en contra de la sociedad CONSTRUCCIONES PALACIO ELORZA S.A.S, CONSORCIO REDES GM integrado por la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GOMEZ, de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO y COLPENSIONES, y en su lugar se CONDENA a la sociedad CONSTRUCCIONES PALACIO ELORZA S.A.S, a reconocer y pagar al demandante la suma de \$1.407.797 por concepto de sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, obligación de la cual es solidariamente responsable la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GÓMEZ, integrantes del Consorcio Redes GM.

2. Se **CONFIRMA** en lo demás las sentencia objeto de apelación.

3.- Costas en esta instancia a cargo de la sociedad 7G7 S.A.S. y el señor MAURO VELEZ GÓMEZ, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.


4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**



**JULIO RAEAL TORDECILLA PAYARES**



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**